Bogotá D.C., 20 de julio de 2019

Doctor

**JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO**

**Secretario General**

Cámara de Representantes

*ASUNTO: Proyecto de Ley ”Por medio de la cual se modifica el artículo 96 y 142 de la Ley 142 de 1994, se regula el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios en unidades residenciales, y se dictan otras disposiciones.”*

Apreciado Secretario,

En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 150 de la constitución Política y en concordancia con el artículo 140 de la Ley 5 de 1992, nos permitimos radicar ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley *Por medio de la cual se modifica el artículo 96 y 142 de la Ley 142 de 1994, se regula el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios en unidades residenciales, y se dictan otras disposiciones.”*.

Atentamente,

**JAIME FELIPE LOZADA POLANCO**

Representante a la Cámara

Departamento del Huila

**Proyecto de Ley No.\_\_\_\_\_\_\_ de 2019 de Cámara**

*”Por medio de la cual se modifica el artículo 96 y 142 de la Ley 142 de 1994, se regula el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios en unidades residenciales, y se dictan otras disposiciones.”*

**EL CONGRESO DE COLOMBIA**

**DECRETA:**

**Artículo 1.** El artículo 96 de la Ley 142 de 1994, quedará así:

“(…) ARTÍCULO 96. OTROS COBROS TARIFARIOS. Quienes presten servicios públicos domiciliarios podrán cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para la recuperación de los costos en que incurran, transcurridos CINCO (5) días hábiles, a partir de la fecha límite de suspensión del servicio por no pago oportuno.

En caso de mora de los usuarios en el pago de los servicios, podrán aplicarse intereses de mora sobre los saldos insolutos.

Las comisiones de regulación podrán modificar las fórmulas tarifarias para estimular a las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía y acueducto a hacer inversiones tendientes a facilitar a los usuarios la mejora en la eficiencia en el uso de la energía o el agua, si tales inversiones tienen una tasa de retorno económica suficiente para justificar la asignación de los recursos en condiciones de mercado.

Parágrafo: La fecha indicada en el primer inciso, no se refiere a la fecha de pago oportuno. Se refiere a la fecha de suspensión, por el no pago indicado en la fecha oportuna. (…)”

**Artículo 2.** El artículo 142 de la Ley 142 de 1994, quedará así:

“(…) ARTÍCULO 142. REESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. Para restablecer el servicio, si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato y a las estipulaciones artículo 96 de la presente ley. (…)”

**Artículo 3.** Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

**JAIME FELIPE LOZADA POLANCO**

Representante a la Cámara

Departamento del Huila

**Exposición de motivos**

**INDICE**

1. Introducción……………………………………………………………………………………05
2. Objetivo de la iniciativa……….……..……………………………...…………………..06
3. Marco normativo sobre los servicios públicos domiciliarios…………..06
4. Estadísticas sobre el índice de pobreza en Colombia…………..………..09
5. Comparativo sobre las modificaciones que se pretenden con el proyecto de ley………………………………………………………………………………………………….11

**I.- INTRODUCCIÓN**

El servicio público domiciliario ha sido reconocido como el medio a través del cual el Estado alcanza la justicia social para promover la igualdad entre sus habitantes. En nuestro País se reconoce la importancia de los servicios públicos domiciliarios por su relación con la finalidad social del Estado de suministrar prestaciones considerando al ciudadano como su objetivo primordial, tal y como lo indica el artículo 365 de la Constitución Política, así:

*“(…) Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad ilícita.(…)”*

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado debiendo asegurar su prestación eficiente. La ley 142 de 1994, establece la naturaleza propia de cada servicio público.

El Estado puede intervenir en la prestación de los servicios públicos domiciliarios para garantizar la cobertura, calidad, prestación ininterrumpida, atención prioritaria, la libertad de competencia, acceso a la tarifa y a la no utilización abusiva de la posición dominante por parte de la empresa prestadora del servicio.

La prestación se hace efectiva a través de un contrato denominado *“de servicios públicos”*, que es un contrato de adhesión, de condiciones uniformes y oneroso, en el que una empresa de servicios públicos presta servicios a un usuario a cambio de un precio.

El contrato de prestación de servicios públicos no queda plenamente librado a la absoluta libertad de las partes, puesto que involucra intereses superiores. De esta manera, la libertad contractual está limitada por la ley.

**II.- OBJETIVO DE LA INICIATIVA**

El presente proyecto de ley tiene por objeto, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas de los estratos 1 y 2.

Así las cosas, se pretende realizar una modificación a los artículos 96 y 142 de la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de servicios públicos domiciliarios, con el fin de regular el cobro del cargo por reconexión o reinstalación del servicio público domiciliario de inmuebles residenciales en los estratos 1 y 2, si transcurridos CINCO (5) días hábiles, a partir de la fecha límite de suspensión del servicio por no pago oportuno, el usuario o suscriptor no efectuó el pago; la empresa prestadora del servicio podrá suspender los servicios.

Esperamos de alguna manera, generar impacto al interior del Congreso de la Republica y posicionar el tema en el ámbito nacional, con el objetivo de recibir sugerencias y/o aportes que ayuden a enriquecer esta importante iniciativa.

**III.- MARCO NORMATIVO SOBRE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**

Se pone de presente la normativa constitucional y legal sobre la materia, que respalda y garantiza el derecho a la prestación de los servicios públicos domiciliarios; aclarando que no solo se formulan normas, leyes al interior de un Estado, sino que los Gobiernos se acogen a directrices internacionales en la protección de este derecho.

**III.I.- Normativa constitucional.**

*“(…) Artículo 1°. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. (…)”*

*“(…) Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (…)”*

*“(…) Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad ilícita. (…)”*

*“(…)* *ARTICULO 366.**El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.*

*Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. (…)”*

*“(…)* *ARTICULO 367.  La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.*

*Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.*

*La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas. (…)”*

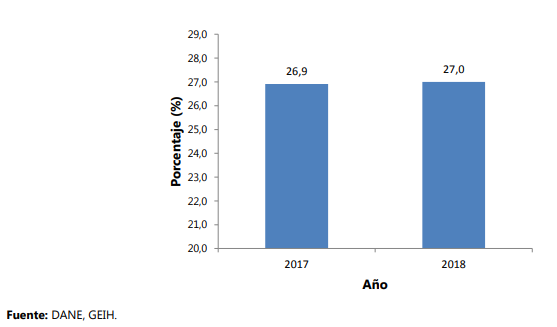
*“(…)* *ARTICULO 369.**La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. Igualmente definirá la participación de los municipios o de sus representantes, en las entidades y empresas que les presten servicios públicos domiciliarios. (…)”*

**III.II.- Normatividad interna.**

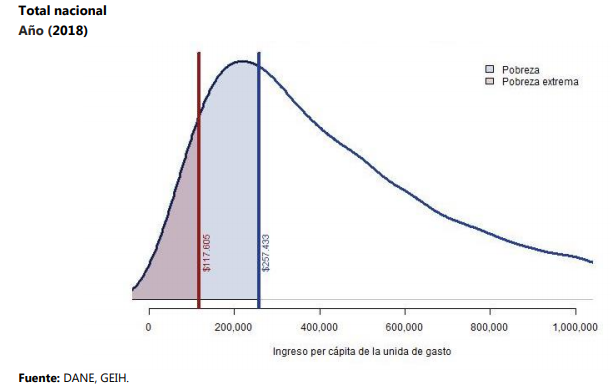
1. ***Ley 37 de 1993:*** Por la cual se regula la prestación del servicio de telefonía móvil celular, la celebración de contratos de sociedad y de asociación en el ámbito de las telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones.
2. **Ley 80 de 1993:** Art. 2° Inc. 3°. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
3. **Ley 142 de 1994:** Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
4. ***Ley 505 de 1999:*** Por medio de la cual se fijan términos y competencias para la realización, adopción y aplicación de la estratificación a que se refieren las Leyes 142 y 177 de 1994, 188 de 1995 y 383 de 1997 y los Decretos Presidenciales 1538 y 2034 de 1996.
5. **Ley 632 de 2000:** Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996.
6. ***Ley 599 de 2000:*** Art. 240 numeral 5.
7. **Ley 689 de 2001:** Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994
8. ***Ley 820 de 2003:*** Art. 2, 14, 15, 22, 24
9. **Ley 962 de 2005:** Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. Art. 2
10. **Ley 1117 de 2006:** Por la cual se expiden normas sobre normalización de redes eléctricas y de subsidios para estratos 1 y 2.
11. ***Ley 1091 de 2006:*** Art. 9, 11.
12. **Ley 1259 de 2008:** Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.
13. ***Ley 1428 de 2010:*** Por la cual se modifica el artículo 3° de la Ley 1117 de 2006.
14. ***Ley 1469 de 2011:*** Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda.
15. ***Ley 1450 de 2011:*** Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Art. 12, 21, 97, 99, 121, 125, 126, 181, 210, 247, 250, 251 Par. 2°.

**IV.- Estadísticas sobre el índice de pobreza en Colombia.**

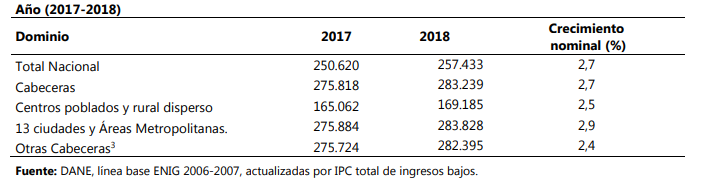
Me permito poner a disposición el índice de pobreza actualizado a 2018, sobre la pobreza monetaria en Colombia, así:

**

El siguiente gráfico, *“(…) muestra la distribución del ingreso per cápita de la unidad de gasto del país. También muestra que la línea de pobreza extrema o línea de indigencia nacional del año 2018 fue de $117.605 pesos y la línea de pobreza monetaria nacional del mismo año fue de $257.433 pesos. De esta manera, la población cuyo ingreso per cápita de la UG se encuentra entre $0 y $117.605 pesos, corresponde al 7.2% de la población colombiana que vive en condición de pobreza extrema y aquellos cuyo ingreso per cápita de la UG de encuentra entre $0 y $257.433 pesos, corresponde al 27% de la población colombiana que vive en situación de pobreza. (…)”*



En 2018, *“(…) la línea de pobreza a nivel nacional fue de $257.433, que equivale a un crecimiento de 2,7% respecto a la línea de 2017 ubicada en $250.620. De acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.029.732. Si la familia vive en las cabeceras este valor es de $1.132.956; si vive en los centros poblados y rural disperso es de $676.740; si vive en las trece ciudades y áreas metropolitanas es de $ 1.135.312 y si vive en otras cabeceras es de $1.129.580. (…)”*



**V.- Comparativo sobre las modificaciones que se pretenden con el proyecto de ley.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Disposición actual** | **Modificación pretendida con el proyecto de ley** |
| **1** | ARTÍCULO 96. OTROS COBROS TARIFARIOS. Quienes presten servicios públicos domiciliarios podrán cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para la recuperación de los costos en que incurran.  En caso de mora de los usuarios en el pago de los servicios, podrán aplicarse intereses de mora sobre los saldos insolutos.  Las comisiones de regulación podrán modificar las fórmulas tarifarias para estimular a las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía y acueducto a hacer inversiones tendientes a facilitar a los usuarios la mejora en la eficiencia en el uso de la energía o el agua, si tales inversiones tienen una tasa de retorno económica suficiente para justificar la asignación de los recursos en condiciones de mercado. | ARTÍCULO 96. OTROS COBROS TARIFARIOS. Quienes presten servicios públicos domiciliarios podrán cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para la recuperación de los costos en que incurran, transcurridos CINCO (5) días hábiles, a partir de la fecha límite de suspensión del servicio por no pago oportuno.  En caso de mora de los usuarios en el pago de los servicios, podrán aplicarse intereses de mora sobre los saldos insolutos.  Las comisiones de regulación podrán modificar las fórmulas tarifarias para estimular a las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía y acueducto a hacer inversiones tendientes a facilitar a los usuarios la mejora en la eficiencia en el uso de la energía o el agua, si tales inversiones tienen una tasa de retorno económica suficiente para justificar la asignación de los recursos en condiciones de mercado.  Parágrafo: La fecha indicada en el primer inciso, no se refiere a la fecha de pago oportuno. Se refiere a la fecha de suspensión, por el no pago indicado en la fecha oportuna. |
| **2** | ARTÍCULO 142. REESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. Para restablecer el servicio, si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato. | ARTÍCULO 142. REESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. Para restablecer el servicio, si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato y a las estipulaciones artículo 96 de la presente ley. |

La información entregada por el Departamento Nacional de Estadísticas – DANE, dio a conocer que la desigualdad en el ingreso de los hogares colombianos aumentó, ya que el coeficiente de Gini[[1]](#footnote-1) para el año 2018 fue de 0,517, luego de que en el 2017 había sido de 0,508.

Así las cosas, este proyecto de ley pretende contribuir con los hogares colombianos, a fin de que en el caso de reconexión o reinstalación de los servicios públicos domiciliarios por parte de las empresas prestadoras del servicio, deba llevarse a cabo, solo transcurridos CINCO (5) días hábiles, a partir de la fecha límite de suspensión del servicio por no pago oportuno.

De esa manera, se otorga un plazo razonable a los usuarios o suscriptores para ponerse al día con sus obligaciones y se respeta la prerrogativa de las empresas prestadoras del servicio en relación a la reconexión, con el fin de asegurar su estabilidad financiera y en consecuencia prestar un efectivo servicio.

Cordialmente,

**JAIME FELIPE LOZADA POLANCO**

Representante a la Cámara

Departamento del Huila

1. El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. [↑](#footnote-ref-1)